



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, once de agosto de dos mil veintitrés**

#### **22-306**

Proceso:	<b>APELA SENTENCIA</b>
Demandante:	<b>BERNARDA RUA RUA</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES</b>
Radicado No.:	<b>05001-31-05-004-2020-00118-01.</b>
Decisión:	<b>MODIFICA SENTENCIA</b>

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, toda vez que la magistrada **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA** se encuentra ausente de manera justificada, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por ambas partes contra la sentencia de primera instancia emitida en el proceso de la referencia.

Conforme al memorial allegado se reconoce personería a **KELLY YISETH HOLGUÍN SERNA** identificada con C.C. 1.128.435.487 y TP 238.479 del C.S. de la J. para que represente los intereses de **COLPENSIONES** conforme sustitución de poder que le hiciera la doctora **ELIANA MORENO PEDROZA**, identificada con C.C. 43.921.415 y TP. 173.191 del C. S de la. J en su calidad de Representante Legal de la Sociedad **MUÑOZ Y ESCRUCERIA S.A.S.** quien, a su vez, sociedad que actúa como apoderada general de la aludida entidad conforme escritura pública No. 3374 del 2 de septiembre de 2019 de la Notaria 9ª del Circulo Notarial de Bogotá D.C.

El Magistrado de conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto aprobado en Sala virtual mediante **ACTA 27** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA Y ANTECEDENTES**

Pretende la demandante que se condene a **COLPENSIONES** para que reconozca y pague la pensión de vejez a partir del 5 de febrero de 2010, los intereses moratorios o en subsidio la indexación y las costas del proceso.

1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EXPUSO EN SÍNTESIS, LOS SIGUIENTES HECHOS:

- Que nació el 5 de febrero de 1950 por lo que cumplió los 55 años de edad el mismo día y mes del 2010.
- Que mediante la Resolución SUB 30138 del 31 de enero de 2020 COLPENSIONES le negó la pensión de vejez por cuanto no reunía los requisitos de la Ley 797 de 2003 y además se adujo que había reclamado indemnización sustitutiva de la pensión de vejez a través de la Resolución No. 109770 del 16 de diciembre de 2010 en cuantía de \$7.990.582.
- Que tiene más de 500 semanas cotizadas en sus últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad necesaria para pensionarse, es decir, entre el 5 de febrero de 1985 y el 5 de febrero de 2005, sin embargo COLPENSIONES le dejó de tener en cuenta los siguientes periodos:

PERIODO	DIAS REPORTADOS	DIAS COTIZADOS
1998-12	30	9
1999-01	30	0
1999-02	30	0
1999-03	30	0
1999-04	30	0
1999-05	30	0
1999-06	30	0
1999-09	30	0
1999-10	30	0
1999-12	30	15
2000-01	30	14
2000-02	30	14
2000-03	30	14
2000-04	30	27
2000-05	30	14
2000-06	30	24
2000-07	30	24
2000-09	30	24
2000-10	30	24
2000-11	30	24
2001-01	30	22
2001-03	30	22
2001-04	30	22
2001-05	30	22
2001-06	30	22
2001-07	30	22
2004-01	30	26
2004-02	30	26
2004-03	30	26
2004-04	30	26
2004-05	30	26
2004-06	30	26
2004-07	30	26
2004-08	30	26
2004-09	30	26
2004-10	30	26
2004-11	30	26
2004-12	30	26

- Que los días dejados de reconocer equivalen a 455, es decir 65 semanas, con las cuales cumple con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, pues ajusta un total de 546.6 semanas cotizadas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de los 55 años de edad, es decir, entre el 5 de febrero de 1985 y el 5 de febrero de 2005.

1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Controvirtió el derecho pretendido e indicó frente a los hechos que acepta como cierto la fecha de nacimiento de la actora, su afiliación al ISS y el contenido de las resoluciones expedidas por la

entidad. De otro lado indicó que no acepta el número de semanas cotizadas que se aduce en la demanda, pues de la historia laboral que se aporta se desprende un número inferior.

#### 1.4. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

Dentro del trámite de la **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**, llevada a cabo por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín el 16 de noviembre de 2022 se **CONDENÓ a COLPENSIONES** a reconocer y pagar a la señora **BERNARDA RUA RUA**:

- La pensión de vejez de conformidad con el Decreto 758 de 1990 a partir del 6 de diciembre de 2016 en cuantía equivalente al salario mínimo legal mensual vigente, adeudándole como retroactivo al 30 de noviembre de 2022, la suma de \$70.108.673, de la cual autorizó realizar el descuento del aporte al sistema de salud. Así mismo autorizó descontar la suma de \$7.990.582 pagada por indemnización sustitutiva debidamente indexada.
- Los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a partir del **7 de abril de 2020** y hasta la fecha del pago efectivo de las sumas adeudadas.
- Y las costas del proceso, fijando las agencias en derecho en la suma de \$4.000.000

## 2. ARGUMENTOS

### 2.1. ARGUMENTOS DEL JUEZ

Señaló que la actora era beneficiaria del régimen de transición en virtud de la edad, dado que al 1º de abril de 1994 tenía más de 35 años de edad, toda vez que nació el 5 de febrero de 1950, por lo que tenía derecho a que su pensión se reconociera conforme al Decreto 758 de 1990 que exige 55 años de edad en el caso de las mujeres y 1000 semanas en toda la vida laboral o 500 en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, requisitos que cumple la actora, toda vez que cumplió los 55 años el 5 de febrero de 2005 y cuenta con **566.85** en los 20 años anteriores a tal data, pues si bien COLPENSIONES solo contabilizó 482 en este lapso, ello obedece a que la entidad dejó de contabilizarse 197.42 semanas sin explicación donde se contabilizan menos días de los cotizados aplicando imputación de pagos por haberse realizado el pago de forma extemporánea o no haberse realizado, las cuales deben ser tenidos en cuenta en su totalidad, pues si COLPENSIONES no realizó las acciones de cobro tendientes a obtener el pago de los aportes en mora o cancelados extemporáneamente, esta omisión no tiene porque perjudicar el derecho pensional del afiliado.

Por lo que CONDENÓ a COLPENSIONES a reconocer la pensión de vejez a partir del 6 de diciembre de 2016, dado que las mesadas anteriores se vieron afectadas de prescripción, en cuantía equivalente al salario mínimo a razón de 14 mesadas anuales dado que la prestación se causó cuando la actora cumplió la edad el 5 de febrero de 2005, es decir que es anterior al Acto Legislativo 01 de 2005. Dispuso que de los valores retroactivos se deben descontar las sumas pagadas por indemnización sustitutiva debidamente indexados.

Finalmente condenó a Colpensiones a pagar los intereses moratorios a partir del **7 de abril de 2020**, es decir, 4 meses después de la solicitud y hasta la fecha del pago, dado que la falta de reconocimiento de la pensión no tiene justificación alguna, pues la entidad no tenía por qué trasladarle al afiliado las consecuencias negativas de la mora de su empleador.

## **2.2. RECURSO DE APELACIÓN**

### **2.2.1. APELACIÓN DE LA PARTE DEMANDANTE**

Manifestó que no está de acuerdo con la fecha de exigibilidad de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que la actora solicitó por primera vez la pensión al ISS en el año 2010, la cual le fue negada a través de Resolución 107770 de 2010 y le concedió la indemnización sustitutiva, pero según se estableció en el presente proceso, desde esa fecha se debió reconocer la prestación pues la demandante ya contaba con los requisitos para acceder a la pensión, por lo que teniendo en cuenta la prestación, los intereses moratorios deben ser concedidos desde la misma fecha en que se otorgó el retroactivo.

## **2.3. APELACIÓN DE COLPENSIONES**

Señaló que se debe revocar la sentencia de primera instancia, pues conforme se analizó en la Resolución SUB 30138 de 2020, de acuerdo a la historia laboral de la demandante esta cotizó 737 semanas a Colpensiones, de las cuales 482 corresponden a los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, es decir, entre el 5 de febrero de 1985 y el 5 de febrero de 2005, por lo que no acredita las semanas exigidas en el Decreto 758 de 1990, además dentro de los archivos de la entidad no hay ninguna solicitud de corrección de historia laboral por algún periodo faltante. De otro lado adujo que no es procedente el reconocimiento a los intereses moratorio por cuanto estos solo se aplican ante el incumplimiento en el pago de las mesadas pensionales, lo cual no ocurre en el

presente caso, toda vez que la demandante no se encuentra pensionada, por lo que COLPENSIONES no ha incurrido en ninguna mora.

#### **2.4. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

Únicamente presentó alegatos la apoderada de COLPENSIONES señalando que se debe revocar la sentencia de primera instancia toda vez que conforme las pruebas allegadas la parte actora no logró acreditar el cumplimiento de los requisitos para acceder a la pensión de vejez, pues si bien tenía 44 años al 1º de abril de 1994, lo que la hace beneficiaria del régimen de transición, no contaba con 750 semanas al 25 de julio de 2005, cuando entró en vigencia el Acto Legislativo de 2005, por lo que la transición solo puede aplicársele hasta el 31 de julio de 2010 y según la historia laboral de la asegurada se establece que cotizó ante esta Administradora un total de 737 semanas al ISS Colpensiones al 31 de julio de 2010, de las cuales solo 482 semanas corresponden a los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, esto es el periodo comprendido entre el 05/02/1985, y el 05/02/2005, no logrando cumplir el requisito de semanas mínimas exigidas por el Decreto 758 de 1990, ni acreditar las 750 semanas al 25 de julio del 2005.

#### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

Conforme a los argumentos esbozados en el recurso de alzada se analizará si la demandante cumple los requisitos para acceder a la pensión de vejez de conformidad con el régimen de transición y dependiendo de ello si hay lugar al reconocimiento de los intereses moratorios.

Así mismo se revisará en CONSULTA los temas que no fueron apelados y que le fueron adversos a COLPENSIONES con el fin de salvaguardar los intereses del Estado como garante de esta entidad, conforme a lo señalado por nuestro órgano de cierre en sentencias 51237 de 4 de diciembre 2013 y 40.200 de 2015.

#### **CONSIDERACIONES DE LA SALA**

En primer lugar, respecto a la procedencia de la pensión de vejez, debe indicarse que no es objeto de discusión que en virtud de la edad, la señora BERNANDA RUA RUA es beneficiaria del régimen de transición contemplado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, dado que tenía más de 35 años al 1º de abril de 1994, fecha de entrada en vigencia del régimen pensional para el sector privado, lo cual le permite que para el reconocimiento de vejez se tengan en cuenta las condiciones de edad,

tiempo y monto del Decreto 758 de 1990, que exige acreditar 55 años de edad, en el caso de las mujeres y 1000 semanas en cualquier época o 500 cotizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima requerida.

Así mismo es importante tener en cuenta la reforma que realizó el CONGRESO DE LA REPÚBLICA cuando expidió el Acto Legislativo 01 de 2005, que modificó el artículo 48 de la Constitución Nacional y limitó el régimen de transición establecido por la Ley 100 de 1993, restringiendo su aplicación hasta el 31 de julio de 2010, salvo para quienes a su entrada en vigencia tuvieran más de 750 semanas cotizadas o su equivalente en tiempo de servicios, con el fin de proteger su expectativa legítima, a los cuales se les mantendría hasta el año 2014.

Conforme las pruebas allegadas se tiene que la señora RUA RUA arribó a los 55 años de edad 5 de febrero de 2005, lo que significa que si a tal data ya tenía acreditadas las semanas para acceder a la pensión de vejez, no se vería afectada por el referido Acto Legislativo.

Ahora, conforme a la Resolución SUB 30138 del 31 de enero de 2020 visible a folio 13 del archivo 01 del expediente digital se observa que COLPENSIONES le negó la pensión de vejez a la actora con el argumento que había cotizado 737 semanas en toda la vida laboral, de las cuales 482 lo fueron dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, esto es, entre el 05/02/1985 y el 05/02/2005. Sin embargo, desde la demanda la parte actora plantea que en su historia laboral existen varias inconsistencias donde hay periodos dejados de contabilizar o que se contabilizan menos días.

Con la demanda se allegó una historia laboral visible a folios 21/29 donde se totalizan 1.058 semanas cotizadas, siendo el ultimo aporte el 31 de enero de 2020. Así mismo en el expediente administrativo se aportó historia laboral expedida en agosto de 2021 donde se evidencia un número superior de semanas, 1.123,14, con aportes hasta junio de 2021. En ambos documentos se observa que al revisar el detalle de pagos efectuados a favor de la señora BERNARDA RUA RUA efectivamente existen varios periodos con inconsistencias, especialmente en el lapso comprendido entre el 05/02/1985 y el 05/02/2005, es decir, en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, donde se a pesar de que se evidencia la fecha de pago, el IBC reportado, el referente de pago y los días reportados por el empleador, la entidad contabiliza menos días de los realmente cotizados, o no se contabiliza ninguna cotización.

Debe precisarse que, aunque en los ciclos que presentan inconsistencias y fueron desconocidos por la entidad, se tratare de periodos donde el empleador omitió hacer el pago de los aportes o lo hizo de forma extemporánea, para todos los efectos, se han de totalizar en la Historia Laboral, toda vez

que ésta Magistratura comparte la tesis según la cual, como lo ha determinado la Corte Suprema de Justicia, quien es el llamado a responder por la prestación es el Fondo de Pensiones, pues la ley lo dotó con facultades legales y mecanismos coactivos para ejercer las acciones de cobro en caso de mora por parte de un empleador. Si dicha entidad no hizo uso de los mismos, no puede alegar su propia negligencia para escudarse del reconocimiento de prestaciones alegando la omisión en el pago de aportes, y la consecuencia a dicha negligencia, no puede ser en ningún momento que la afiliada pierda el derecho a su pensión. Véase para el efecto la sentencia hito del 22 de julio de 2008, Radicación 34270. Posición reiterada en forma pacífica en sentencias como la de radicado 53782 de 2018, donde se dijo:

*“Sobre la línea jurisprudencial, garantizadora de los derechos de los trabajadores frente a empleadores morosos con el sistema de seguridad social y administradoras de pensiones negligentes en el recaudo de los aportes, la sentencia SL1363-2018 del 11 de abril de 2018, la rememoró así:*

*“Para responder al requerimiento de la censura, ésta Sala de Casación ratifica, que desde la sentencia CSJ SL 22, jul, 2008, rad. 34270, varió su jurisprudencia respecto a los efectos de la mora del empleador en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Pensiones. Es por ello que a partir de la referida providencia, la Corte estableció que cuando se presente dicha situación, y esto necesariamente impida el acceso a las prestaciones, si además medió incumplimiento de la respectiva administradora en el deber legal que tiene del cobro, es a ésta última a la que le incumbe el pago de las mismas, a los afiliados o a sus beneficiarios.*

*También hizo expresa precisión la Corte, para el caso concreto de los afiliados en condición de trabajadores dependientes, que, si estos han cumplido cabalmente con el deber que les asiste frente a la seguridad social, de prestar el servicio y así causar la cotización, no pueden salir perjudicados ellos o sus beneficiarios, por la mora del empleador en el pago de los aportes y que, antes de trasladar a éste las consecuencias de esa falta, resulta menester verificar si la administradora de pensiones cumplió con el deber específico del cobro.”*

*Por lo anterior, se reitera que, para efectos de calcular las semanas cotizadas por el afiliado, con el propósito de establecer si efectivamente se cumplen los presupuestos legales, tendientes a obtener el derecho pensional, deben tenerse en cuenta no sólo las consignadas oportunamente, sino también las que se encuentran en mora, siempre que no haya mediado gestión de cobro por parte de la AFP a la cual se encontraba afiliado. Estos criterios han sido reiterados por la Sala de forma constante, entre otras, se pueden consultar las sentencias de la CSJ SL 17 may. 2011, rad. 38622; SL, 6 feb. 2013, rad. 45173; SL 8715-2014, rad. 42989; SL 14388-2015, rad. 43182; SL 14987-2016, rad. 46408; y SL 15980-2016 rad. 69294.”*

Por tanto se tiene que la señora BERNARDA RUA RUA presenta 81.71 semanas con inconsistencias o mora que deben ser totalizadas en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, así:

INCONSISTENCIAS	DIAS COTIZADOS	DIAS CONTABILIZADOS	DIAS FALTANTES
1998-12	30	9	21
1999-1	30	0	30
1999-2	30	0	30
1999-3	30	0	30
1999-4	30	0	30
1999-5	30	0	30
1999-6	30	0	30
1999-9	30	0	30
1999-10	30	0	30
1999-12	30	15	15

2000-1	30	14	16
2000-2	30	14	16
2000-3	30	14	16
2000-4	30	27	3
2000-5	30	14	16
2000-6	30	24	6
2000-7	30	24	6
2000-9	30	24	6
2000-10	30	24	6
2000-11	30	24	6
2001-01	30	22	8
2001-03	30	22	8
2001-04	30	22	8
2001-05	30	22	8
2001-06	30	22	8
2001-07	30	22	8
2002-02	30	20	10
2002-07	30	20	10
2002-08	30	20	10
2002-09	30	20	10
2002-10	30	20	10
2002-11	30	20	10
2002-12	30	20	10
2003-01	30	19	11
2003-02	30	19	11
2003-03	30	19	11
2004-01	30	26	4
2004-02	30	26	4
2004-03	30	26	4
2004-04	30	26	4
2004-05	30	26	4
2004-06	30	26	4
2004-07	30	26	4
2004-08	30	26	4
2004-09	30	26	4
2004-10	30	26	4
2004-11	30	26	4
2004-12	30	26	4
TOTAL DIAS DEJADOS DE CONTABILIZAR			572
TOTAL SEMANAS DEJADAS DE CONTABILIZAR			81,71

Por consiguiente, al sumar las **81.71** semanas con inconsistencias, con las 482 semanas reportadas en la historia laboral que aparecen reflejadas, se tiene que la señora BERNARDA RUA RUA, cotizó en la historia laboral en los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad semana 563.86 semanas, así:

EMPLEADOR	DESDE	HASTA	DIAS	SEMANAS
OMAR OBREGON	30/05/1990	18/01/1991	234,01	33,43
LUCIA MOLINA DE ECHE	2/09/1991	5/08/1992		48,43
LUCIA MOLINA DE ECHE	16/09/1992	7/01/1994		68,43
ESTRADA DE VILLEGAS	26/01/1994	2/03/1994		5,14
LUCIA MOLINA DE ECHE	10/02/1994	30/11/1994		39
BETANCUR GALINDO FRA	1/10/1997	31/10/1997		0,14
BETANCUR GALINDO FRA	1/11/1997	30/11/1997		4,29
BETANCUR GALINDO FRA	1/12/1997	31/12/1997		4,29
BETANCUR GALINDO FRA	1/01/1998	31/07/1998		30
BETANCUR GALINDO FRA	1/08/1998	31/12/1998		18,43
ARIAS LARA GLADYS MA	1/07/1999	31/08/1999		8,57
ARIAS LARA GLADYS MA	1/11/1999	30/11/1999		4,29
ARIAS LARA GLADYS MA	1/12/1999	31/12/1999		2,14
ARIAS LARA GLADYS MA	1/01/2000	31/03/2000		6
BLANDYS ARIAS L	1/04/2000	30/04/2000		3,86
ARIAS LARA GLADYS MA	1/04/2000	30/04/2000		8,86
ARIAS LARA GLADYS MA	1/05/2000	31/07/2000		4,29
GLADIS ARIAS	1/09/2000	30/11/2000		10,29
ARIAS LARA GLADYS MA	1/01/2001	31/01/2001		3,14
ARIAS LARA GLADYS MA	1/02/2001	28/02/2001		4,29



ARIAS LARA GLADYS MA	1/03/2001	31/07/2001		15,71
ARIAS LARA GLADYS MA	1/08/2001	31/01/2002		25,71
ARIAS LARA GLADYS MA	1/02/2002	28/02/2002		2,86
ARIAS LARA GLADYS MA	1/03/2002	30/06/2002		17,14
ARIAS LARA GLADYS MA	1/07/2002	31/12/2002		17,14
ARIAS LARA GLADYS MA	1/01/2003	31/12/2003		46,71
ARIAS LARA GLADYS MA	1/01/2004	31/12/2004		44,57
ARIAS LARA GLADYS MA	1/01/2005	5/02/2005		5
<b>TOTAL SEMANAS HISTORIA LABORAL ULTIMOS 20 AÑOS</b>				<b>482,15</b>
<b>TOTAL SEMANAS EN MORA/ INCONSISTENCIAS</b>				<b>81,71</b>
<b>TOTAL SEMANAS ULTIMOS 20 AÑOS</b>				<b>563,86</b>

En consecuencia se tiene que la demandante acredita más de las 500 semanas exigidas por el Decreto 758 de 1990 en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad, esto es entre el 05/02/1985 y el 05/02/2005 y por tanto tiene derecho a acceder a la pensión de vejez, de conformidad con el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el Decreto 758 de 1990, como de forma acertada lo estimó el a quo, por lo que se CONFIRMARÁ la decisión de primera instancia en este punto.

De otro lado en cuanto a la fecha a partir de la cual se debe reconocer la prestación, cabe recordar que de conformidad con el artículo 13 del Decreto 758 de 1990, aplicable por remisión del artículo 31 de la Ley 100 de 1993, el disfrute se da cuando una vez causada la prestación se solicita a la entidad administradora de pensiones el reconocimiento de la misma y se ha dado el retiro expreso o desafiliación tácita del sistema general de pensiones, pues para la liquidación de la pensión se debe tener en cuenta hasta la última semana cotizada pues mal se podría reconocer un retroactivo sobre unas semanas que efectivamente sirvieron de base para el cálculo de la prestación.

Bajo éste panorama, inicialmente tendríamos que la última cotización al sistema sería la determinante para establecer la fecha de disfrute. Para ello, nos remitimos a la información de la Historia Laboral aportada por Colpensiones con el expediente administrativo, en la cual se aprecian aportes hasta el junio de 2021.

Sin embargo, no puede desconocerse que en dicho expediente administrativo, también reposa copia de la Resolución 109770 del 16 de diciembre de 2010 que da cuenta que la señora BERNARDA RUA RUA solicitó la pensión de vejez el **18 de mayo de 2010**, fecha para la cual ya tenía los requisitos para acceder a la pensión de vejez, sin embargo le fue negada con el argumento que no tenía las semanas suficientes y que debía seguir cotizando al sistema, por lo que las cotizaciones realizadas con posterioridad son producto de la inducción en error de la entidad al negarle la pensión.

Nuestro órgano de cierre ha reconocido el derecho a disfrutar de la pensión desde el momento en que se causa la misma pese a que con posterioridad el afiliado haya continuado realizando aportes

al régimen pensional, pero únicamente cuando se demuestra que dichas cotizaciones lo fueron por la errada información suministrada por parte de la entidad administradora. Entre dichos pronunciamientos encontramos las sentencias 37.798, 39.206 y 63.823 de 2018, además de las de radicación 34.514, 39.391 y 42.289 y en la 69105 de 2019 que se refiere a la pensión especial de alto riesgo, oportunidad en la que señaló la Corte:

*“En relación con el disfrute de la pensión especial de vejez, la jurisprudencia de la Corporación ha adoctrinado que, conforme los artículos 13 y 35 del Acuerdo 049 de 1990, se requiere la desvinculación formal del sistema general de pensiones. No obstante, también ha precisado que ante situaciones particulares y excepcionales, que deben verificar los jueces en su labor de dispensar justicia, es menester acudir a soluciones diferentes, razón por la cual, para tales efectos, ha definido fechas anteriores a las del retiro del sistema (CSJ SL5603-2016).*

*En esa perspectiva se advierte que, en este caso, la accionada actuó con negligencia al momento de resolver la solicitud del actor al indicarle que debía cotizar semanas adicionales con base en una normativa que no era pertinente. Por tanto, a pesar de que no hubo un retiro formal del sistema general de pensiones, la prestación deprecada debe otorgarse desde el día siguiente a aquel en que el actor cumplió con los requisitos para consolidar el derecho especial, esto es, a partir del 6 de octubre de 2007, pues el accionar de la entidad demandada lo obligó a continuar cotizando. Para efectos del cálculo del monto de aquella, no se deben tener en cuenta los aportes que realizó con posterioridad.”*

De los antecedentes jurisprudenciales aludidos, es viable concluir que para efectos de declarar la inducción en error es un requisito sine qua non, que exista una errada información por parte de la entidad, es decir, que el afiliado aun teniendo derecho a la pensión, ésta se niegue por cualquier razón ajena a la realidad o a la Ley, pues sólo de una negativa infundada se podrían desprender las consecuencias que alude nuestro órgano de cierre al omitir en dichos casos el cese de cotizaciones o novedad de retiro para efectos de disfrutar la pensión.

En el caso de autos, se tiene que el ISS hoy COLPENSIONES inicialmente le negó la pensión a la actora mediante la resolución No. 109770 de 2010, con el argumento que solo contaba con 724 semanas cotizadas de las cuales ninguna lo había sido dentro de los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad. Sin embargo, dichas razones eran infundadas, pues según se analizó para esta fecha el actor contaba con las semanas necesarias para acceder a la pensión, pues si la entidad hubiera ejercido oportunamente las acciones de cobro y no hubiera realizado la imputación de pago por los aportes pagados en forma tardía todas sus semanas se hubieran reflejadas en la historia laboral.

De lo anterior se colige, que en este caso, la inducción en error, en los términos descritos por la jurisprudencia, se materializa a partir del 25 de febrero de 2011, día siguiente a la fecha de notificación de la referida resolución que inicialmente resolvió de forma desfavorable la solicitud de la actora, y por tanto los aportes realizados con posterioridad a esa fecha **SÍ** son producto de inducción en error por parte de la entidad, pues bajo ese panorama, la demandante optó por

continuar cotizando con el fin de completar las semanas que supuestamente le hacían falta para adquirir el derecho, por lo que los aportes realizados con posterioridad a esa fecha no están llamados a incidir en la fecha de disfrute de la pensión.

Empero, no puede desconocerse que la señora RUA RUA después de la anterior negativa dejó transcurrir varios años, antes de solicitar nuevamente la prestación o acudir a la vía judicial, pues solamente hasta el día 6 de diciembre de 2019 pidió otra vez a COLPENSIONES le fuera reconocida la prestación por vejez, petición que le fue resuelta de forma desfavorablemente a través de la Resolución SUB 30138 de enero 2020 y radicando la demanda el 28 de febrero del mismo año, por lo que las mesadas causadas con anterioridad al **6 de diciembre de 2016** se vieron afectadas de prescripción como de forma acertada lo analizó el a quo.

Ahora en virtud de la Consulta se revisó el valor del retroactivo liquidado por el despacho, por las mesadas causadas entre el 6 de diciembre de 2016 y el 30 de noviembre de 2022, así:

Año	# mesadas	Valor pensión (mínimo)	Total Retroactivo (mínimo)
2016	25 días	\$ 689.454	\$ 574.545
2017	14	\$ 737.717	\$ 10.328.038
2018	14	\$ 781.242	\$ 10.937.388
2019	14	\$ 828.116	\$ 11.593.624
2020	14	\$ 877.803	\$ 12.289.242
2021	14	\$ 908.526	\$ 12.719.364
2022	13	\$ 1.000.000	\$ 13.000.000
TOTAL			\$ 71.442.201

Encontrando que al actor le correspondería un retroactivo es ligeramente superior a liquidado por el a quo, sin embargo, como la sentencia no fue apelada por la parte actora en este punto, no se hará ninguna modificación para no hacer más gravosa la situación de la entidad a cuyo favor se revisa en consulta.

De otro lado, respecto a los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que al tenor de la referida norma, estos se causan por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales, por lo que inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue morigerando a partir de la sentencia con radicado 44454 del 2 de octubre de 2013, dada una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dichos intereses no eran procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encuentren justificadas, bien sea porque

tengan respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

Aunado a lo anterior, para la Sala la tesis del apoderado de COLPENSIONES en sus alegatos, según la cual los referidos intereses no se generan sino cuando existe para el administrado una pensión reconocida y a pesar de ello se omite la obligación de cancelarla oportunamente, no comporta una correcta intelección de la norma, toda vez que la obligación de pago surge, en éste caso, cuando el beneficiario acredita el cumplimiento de los requisitos estipulados en la Ley para disfrutar de la pensión y eleva la solicitud pertinente al ente administrador pues éstos no operan de manera automática con la ocurrencia del hecho físico que genera el derecho a la pensión, sino que es preciso que haya una reclamación, pues sólo a partir de la misma empiezan a correr los términos de ley para que la Administradora del Fondo de Pensiones la reconozca o no y, se pueda hablar de mora y como consecuencia empiecen a generar los intereses referidos.

En el caso de la pensión de vejez, éstos se causan cuatro meses después de la presentación de la solicitud, toda vez que es el tiempo establecido en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 para que la entidad o fondo de pensiones resuelva sobre el derecho.

Descendiendo al asunto que ocupa la atención de la Sala, tenemos que la señora BERNARDA RUA RUA solicitó la pensión de vejez el **18 de mayo de 2010**, según consta en la Resolución No. 109770 de 2010, oportunidad en la que se le negó el derecho en forma injustificada indicándole que solo tenía 724 cotizadas, de las cuales ninguna correspondía a los últimos 20 años, cuando según lo analizado para tal data, la actora ya contaba con las 500 semanas en dicho lapso, por lo que si la entidad hubiera realizado un manejo adecuado de su historia laboral y hubiera ejercido las acciones de cobro frente a los empleadores morosos que estaban realizando los aportes de forma tardía y sin los correspondientes intereses, hubiera encontrado que la señora RUA RUA tenía acreditados los requisitos para acceder a la pensión

Por tanto, encuentra la Sala, que la negativa de la entidad de reconocer la pensión en modo alguna estuvo justificada y por consiguiente es adecuada la decisión de la a quo de condenar a los intereses moratorios y si bien estos serían procedentes 4 meses después de la solicitud inicial, lo cierto es que ante la inactividad de la actora en el reclamo de la pensión también afectó los intereses por lo que estos deben correr desde la fecha en que se están concediendo las mesadas, tal y como lo solicita la parte actora en su recurso. Así las cosas se **MODIFICARÁ** la sentencia de primera instancia y en su lugar se dispondrá a COLPENSIONES liquidar los intereses a partir del **6 de diciembre de 2016 y hasta la fecha de pago efectivo** del retroactivo adeudado.

En consecuencia, la sentencia de primera instancia será CONFIRMADA PARCIALMENTE, con la MODIFICACIÓN a que se hizo referencia.

Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

#### 4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en el nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

#### DECIDE

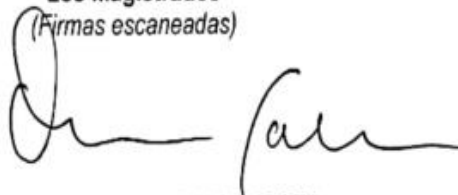
**PRIMERO: CONFIRMA PARCIALMENTE** la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2022 por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ordinario laboral promovido por la señora **BERNARDA RUA RUA** identificada con cédula de ciudadanía N° **21.768.106** contra **COLPENSIONES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO: MODIFICA** la fecha a partir de la cual se condena a los intereses moratorios disponiendo que los mismos se deben liquidar los intereses a partir del **6 de diciembre de 2016** y hasta la fecha de pago efectivo del retroactivo adeudado.

**TERCERO:** Costas en esta instancia a cargo de la entidad demandada por no haber tenido éxito en el recurso. En esta instancia se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA

MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA  
Sin firma por ausencia justificada



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

**REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL**



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante:	<b>BERNARDA RUA RUA</b>
Demandado:	<b>COLPENSIONES</b>
Radicado No.:	<b>05001-31-05-004-2020-00118-01.</b>
Decisión:	<b>MODIFICA SENTENCIA</b>
Fecha de la sentencia:	<b>11/08//2023</b>

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/148> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy **14/08/2023** desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario